

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 21 .- .-

| | |
|--------------|---|
| NOMENCLATURA | : 1. [40]Sentencia |
| JUZGADO | : 15° Juzgado Civil de Santiago |
| CAUSA ROL | : C-8385-2024 |
| CARATULADO | : CERDA/CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO - |
| CDE | |

Santiago, once de abril de dos mil veinticinco

VISTOS:

Con fecha 13 de mayo de 2024, a folio 1, comparece don Luis Pérez Camousseight, abogado, con domicilio en Doctor Sótero del Río n°326, oficina n°707, comuna de Santiago, en representación convencional de don Jorge Enrique Cerda Taverne, fotógrafo, con domicilio en Rafael Maluenda n°1.546, comuna de Vitacura, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios, en juicio de hacienda, en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado don Raúl Letelier Wartenberg, abogado, con domicilio en Agustinas n°1.225, piso n°4, comuna de Santiago.

Relata que, a principios de mayo de 1982, el actor tuvo una entrevista de trabajo en el Diario La Tercera para postular como fotógrafo, en la que se le pidió hacer un reportaje libre para luego presentarlo. Así, el 10 de mayo de 1982, fotografió a una niña de unos 8 a 10 años en la entrada de una carnicería cerca de la Villa Naciones Unidas, comuna de Ñuñoa, quien relata salió corriendo y desapareció, y quien -en el momento no lo sabía- se trataba de la hija de un comisario de Carabineros de Chile.

Luego, durante la madrugada del 15 de mayo de 1982, alrededor de las 02:00 y 10 minutos antes del toque de queda, en circunstancias que se encontraba llegando a su departamento en Calle 4 block n°6.820, departamento n°44, Villa Naciones Unidas, comuna de Ñuñoa, refiere haber sido interceptado por tres hombres que posteriormente supo pertenecían a la comisión civil de Carabineros, los que de inmediato y de forma violenta comienzan a increparlo y a registrarle los contenidos de su ropa, y quienes comienzan a agredirlo verbal y físicamente luego de comentarles que era fotógrafo. Señala que los referidos



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNXXTJYTUX

«RIT»

Foja: 1

querían saber dónde vivía y con quién y si tenían armas, y que seguidamente lo esposan y lo llevan encañonado hasta la puerta del departamento, obligándolo a abrirla bajo amenaza de que lo matarían si había alguien detrás.

En este contexto, afirma que los sujetos sacaron violentamente de la cama a los amigos con quienes vivía preguntando por armas y que los vendaron y trasladaron a un lugar desconocido, el que resultó ser la 18° Comisaría de Ñuñoa, donde quedaron incomunicados, separados y encerrados en calabozos aislados. El actor indica que después entra un carabinero a su celda gritando que aquel quería matar a su hija, golpeándolo con puños en cuerpo y rostro incluso al caer al piso, lo que se repitió al menos dos veces.

Más tarde, señala que llega un carabinero de civil a la celda, quien lo esposa y venda, y lleva a otra dependencia donde es interrogado por al menos tres personas, quienes lo golpean en la cabeza, le ponen un arma en la sien y juegan a la ruleta rusa, y le propinan golpes en riñones y testículos, encargándose uno de ellos de mantenerlo en pie en todo momento, lo que duró entre 40 y 60 minutos hasta que lo llevan de vuelta a la celda, manteniéndolo esposado y con la venda puesta por un par de horas. Luego, afirma que estos vuelven y todo comienza de nuevo, preguntando por armas y nombres de personas, y decidiendo luego llevarlo a la parrilla para que hable más rápido, perdiendo el conocimiento allí. Posteriormente, es sacado dos veces más, siempre con venda y esposado, repitiendo el mismo espanto y violencia. Refiere que los últimos que lo torturaron fueron de la Policía de Investigaciones, pues se identificaron.

Luego, señala que cerca de las 09:00 del 16 de mayo de 1982, fueron trasladados a la 1° Comisaría de Santiago, donde permaneció hasta el 20 de mayo de 1982, donde fue maltratado física y psicológicamente todas las noches. Agrega que, estando en dicha comisaría, llegó la cónsul de la Embajada de Francia, quien lo visitó todos los días hasta que fue liberado, pues tiene nacionalidad franco-chilena. Con todo, indica que mientras sus amigos quedaron libres, él quedó con relegación, la que se permutó por dejar Chile con la ayuda del gobierno francés, lo que sucedió a principios de agosto de 1982 llegando a un país desconocido, sin hablar el idioma y sin recursos económicos. Afirma que con el tiempo empezó a tener pérdida auditiva, vértigo y pérdida de un testículo.

Finalmente, indica que volvió a Chile a fines de 1990, después de haber vivido en el exilio por aproximadamente ocho años.

Con todo, alega que las torturas descritas han provocado un perjuicio psíquico, físico y moral incommensurable por parte del Estado de Chile, así como



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNXXTJYTUX

«RIT»

Foja: 1

un perjuicio material evidente, y que tales daños tienen carácter de permanentes, pues el actor continúa con secuelas producto de la privación de libertad, torturas y exilio, motivo por el cual demanda el pago de \$200.000.000.- para sí, con reajustes de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, con costas, o en su defecto el monto indemnizatorio que este tribunal estime.

En cuanto al derecho, alega que el Estado de Chile es civilmente responsable de los perjuicios morales ocasionados puesto que los perpetradores de los hechos eran miembros de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes se encontraban revestidos de autoridad política. Dicha responsabilidad, agrega, ha sido expresamente reconocida por el Estado de Chile mediante distintos actos e instrumentos jurídicos, entre estos, el Informe sobre Prisión Política y Tortura conocido como "Informe Valech", en el que consta el reconocimiento del actor como víctima de prisión política y tortura. Asimismo, indica que dicha responsabilidad emana de la Constitución Política de la República y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que las torturas sufridas por el actor constituyen graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Luego de efectuar una relación sobre la evolución doctrinaria y jurisprudencial del régimen de responsabilidad del Estado, y de citar lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 38 de la Constitución Política de la República y en los artículos 4 y 42 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, así como doctrina y jurisprudencia al efecto, alega que la acción de derecho público para exigir la responsabilidad extracontractual del Estado por actos u omisiones por las cuales se ha producido daño a las personas, es imprescriptible. Lo anterior, dada la ausencia de regulación jurídica interna y la normativa internacional de derechos humanos, la que impone en el Estado de Chile el deber de reparación integral de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado, sin resultar posible para este invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales conforme lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

Finalmente, alega que en el caso concreto se cumplen todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los daños causados, a saber: 1) la existencia de daño moral producto de las torturas, prisión política, persecución y exilio sufridos por el actor; 2) la acción u omisión que emanó de órganos del Estado, ya que agentes del Estado torturaron al actor; 3) nexo causal, toda vez que el daño a la víctima emana justamente de la perpetración del ilícito civil; y 4) la no



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNXXTJYTUX

«RIT»

Foja: 1

conurrencia de causales de justificación que eximan al Estado de Chile de su responsabilidad.

Por tanto, previas citas legales, solicita en definitiva se acoja la demanda y se declare que el demandado debe pagar al actor, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas y prisión política de que fue objeto, la suma total de \$200.000.000.-, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total, o la suma que este tribunal estime ajustada a derecho y equidad, con costas.

Con fecha 27 de mayo de 2024, a folio 8, tiene lugar la notificación de la demanda en la forma establecida en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

Con fecha 17 de junio de 2024, a folio 9, comparece don Marcelo Chandía Peña, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, quien contesta la demanda y solicita su total rechazo, con costas.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral satisfactiva, fundada en que el actor ya ha sido indemnizado a través de las medidas contempladas en las leyes de reparación y que limitan las pretensiones indemnizatorias. En este sentido, argumenta que la reparación de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos se ha realizado principalmente por medio de tres tipos de compensaciones, a saber: a) transferencias directas de dinero; b) asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, c) reparaciones simbólicas. Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En lo que concierne a la primera modalidad, diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos, la discusión radicaba entre quienes sostenían que debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras otros estimaban que a través de una pensión vitalicia, ambas con fines resarcitorios.

Indica que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de pensiones la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); en concepto de bonos ha asignado la suma de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNXXTJYTUX

«RIT»

Foja: 1

\$41.910.643.367- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; en cuanto a desahucio (bono compensatorio), la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley N°19.123; y por Bono Extraordinario (Ley 20.874), la suma de \$23.388.490.737.-

Consecuencia de lo anterior, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario ello no obsta a que se pueda valorizar para poder saber cuál fue su impacto compensatorio; basta con sumar las cantidades pagadas a la fecha, más las mensualidades que todavía quedan por pagar.

En cuanto a las reparaciones específicas, señala que La Ley N°19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos, estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

En cuanto a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios. A nivel presupuestario, añade, el programa cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006 y en el año 2020, este sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$6.543.883.-

Igualmente señala se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores y se concedieron,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXXXTJYTUX

«RIT»

Foja: 1

asimismo, beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Por último, en lo referente a las reparaciones simbólicas, señala que al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Indica que este tipo de acciones pretende reparar tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral. A modo de ejemplo destaca la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, el 30 de agosto de cada año; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; el establecimiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos; y, la construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las infracciones a los DD.HH., tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras.

Concluye que de todo lo expresado hasta ahora existe una identidad de causa entre lo que se pide en autos y las reparaciones ya realizadas, los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica, tanto la indemnización solicitada en estos autos como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En segundo lugar, opone la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil en relación con el 2497 del mismo, solicitando el rechazo de la demanda en todas sus partes por encontrarse prescrita la acción.

Sostiene que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia, hasta la restauración de la democracia; a la fecha de la notificación de la demanda, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva de 4 años que establece el citado artículo 2332 del Código de Bello.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXNXXTJYTUX

«RIT»

Foja: 1

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 del Código Civil, en relación con su artículo 2514, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la de notificación de la demanda transcurrió con creces dicho plazo.

En dicho contexto, precisa que por regla general todos los derechos y acciones son prescriptibles, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales. Aclara que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización, solo ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción, señalando jurisprudencia al efecto.

Por otro lado, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política de la República y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa. En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que la demandante estuvo en situación de hacerlo.

De otra parte, cualquiera sea el origen o naturaleza de los perjuicios, la indemnización no tiene un carácter sancionatorio, no cumple un rol punitivo, de modo que no ha de extrañar que la acción destinada a exigirla sea como toda acción patrimonial, expuesta a extinguirse por prescripción.

En este punto, precisa, que pese a lo expuesto por los demandantes en su libelo, señala que ninguno de los instrumentos internacionales que invoca (Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad; Convenios de Ginebra de 1949; Resolución n°3.074 de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas; Convención Americana sobre Derechos Humanos) contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNXXTJYTUX

«RIT»

Foja: 1

En subsidio a las defensas y excepciones reproducidas precedentemente, interpone, las siguientes alegaciones en relación con la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido.

Refiere que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. En tal sentido, la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia y en este caso en particular, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia.

Por lo demás, refiere que, sin desconocer los graves hechos de violación a los derechos humanos ocurridos en dictadura, a fin de acreditar su efectiva ocurrencia se impone el deber de observar la necesaria distinción entre la presunción como herramienta jurídica normativa y aquella empleada como medio de convicción judicial, pues si bien es factible que el fallador arribe a la conclusión de que se verificó una afectación moral indemnizable a partir de una multiplicidad de hechos graves, ciertos y conocidos, ello no exime a la parte demandante de probar su daño, ya que no existe norma que permita presumir la concurrencia del daño moral ni mucho menos a invertir el peso de la prueba en la materia. Además, refiere que los tribunales superiores de justicia han declarado que la constatación de la efectiva concurrencia y valoración de los perjuicios morales no se puede dar por establecida con el solo hecho de haberse incorporado los nombres de las víctimas en las nóminas libradas por los órganos encargados de materializar los beneficios de las leyes de reparación.

En subsidio de las excepciones y defensas precedentes, alega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por el actor por parte del Estado a través de las leyes de reparación y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales, pues lo contrario implicaría aceptar un doble pago.

Finalmente, en un último acápite y en relación con la procedencia del cobro de reajustes e intereses, precisa que los primeros solo pueden devengarse en caso de que la sentencia acoja la demanda y desde que se encuentre firme y ejecutoriada. En cuanto a los segundos, refiere que en virtud de lo establecido en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNXXTJYTUX

«RIT»

Foja: 1

el artículo 1551 del Código Civil, el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por tanto, debido a lo expuesto, solicita en definitiva el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, se rebaje sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Con fecha 21 de junio de 2024, a folio 13, la demandante evacúa la réplica reiterando los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda, y agrega, en relación con la excepción de reparación integral, que la preceptiva invocada por el Fisco de Chile, que solo consagra un régimen de pensiones asistenciales, no resulta compatible con la indemnización que se persigue en autos. Añade que, por lo demás, las leyes invocadas no han establecido un régimen de incompatibilidad entre tales beneficios y las indemnizaciones judiciales, ni mucho menos de renuncia a las acciones judiciales.

En cuanto a la excepción de prescripción, refiere que la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema ha sido enfática en señalar que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, no resulta coherente entender que, siendo la acción penal persecutoria imprescriptible, la acción civil indemnizatoria se encuentre sujeta a las normas de prescripción contenidas en la ley civil interna, pues ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre derechos humanos, la que es integrante del ordenamiento jurídico nacional en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República.

Por último, en cuanto al monto de la indemnización, estima que el monto demandado se encuentra ajustado a la justicia, ya que se trata del daño moral de la mayor entidad, sin perjuicio de que será el tribunal quien determinará soberanamente el monto del daño moral y desde cuándo se aplicarán intereses y reajustes.

Con fecha 4 de julio de 2024, a folio 15, la parte demandada evacúa la réplica, ratificando la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda, las que da por expresamente reproducidas.

Con fecha 8 de julio de 2024, a folio 17, se recibe la causa a prueba, rindiéndose aquella que consta en autos.

Con fecha 23 de agosto de 2024, a folio 30, se cita a las partes para oír sentencia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNXXTJYTUX

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don Luis Pérez Camousseight, en representación convencional de don Jorge Enrique Cerda Taverne, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios, en juicio de hacienda, en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado don Raúl Letelier Wartenberg, todos ya individualizados, por los fundamentos de hecho y argumentos de derecho reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que, al contestar la demanda, el Fisco de Chile solicita su íntegro rechazo, o en subsidio, la rebaja del monto indemnizatorio demandado, por los argumentos ya reseñados en lo expositivo de esta sentencia.

TERCERO: Que, el actor sustenta su pretensión indemnizatoria en el hecho de ser víctima de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra, producto de la detención y torturas a las que fueron sometidos por agentes del Estado de Chile en el ejercicio de sus funciones, las que produjeron las secuelas físicas y psicológicas que afirma han perdurado en el tiempo.

CUARTO: Que, atendido lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, toca al actor acreditar los supuestos de hecho en que afinsa su acción.

QUINTO: Que, para acreditar sus dichos, la parte demandante acompañó la siguiente prueba instrumental, sin objeción contraria:

A folio 22:

1. Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad.
2. Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.
3. Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto
4. psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.
5. Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz



«RIT»

Foja: 1

Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.

6. Artículo titulado "Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos" del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.

A folio 23:

7. Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1.
8. Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1.
9. Copia de antecedentes de don Jorge Enrique Cerda Taverne presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en carpeta del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

A folio 24:

10. Informe psicológico evaluación de daño asociado a violencia política en dictadura emitido por el Prais del Servicio de Salud Metropolitano Oriente de don Jorge Cerda Taverne, de fecha junio de 2024.

SEXTO: Que, por su parte, el demandado incorporó como prueba instrumental, sin objeciones, copia del oficio ORD. n°24812-2024, emitido por el Instituto de Previsión Social, con fecha 04 de julio de 2024.

SÉPTIMO: Que, con fecha 19 de junio de 2024, a folio 11, se ordenó oficiar, a petición de la parte demandada, al Instituto de Previsión Social, a fin de informar sobre todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido la parte demandante, don Jorge Enrique Cerda Taverne, RUN 7.503.741-4, especialmente en relación con las leyes 19.123, 19.234, 19.992, 20.874, y demás pertinentes. La respuesta a dicho oficio fue remitida a este tribunal con fecha 5 de julio de 2024, a folio 16.

OCTAVO: Que, habiéndose apreciado la prueba rendida en forma legal, y teniendo especialmente presente lo expuesto en los documentos designados con los números 8° y 9° del motivo quinto precedente, es posible tener por acreditado que el actor don Jorge Enrique Cerda Taverne fue víctima de apremios ilegítimos y tortura por parte de agentes del Estado, lo que se tradujo en los tratos crueles, inhumanos y degradantes en la forma en que se exponen en el libelo, con motivo de la detención ocurrida en la noche del 14 de mayo de 1982, siendo trasladado



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNXXTJYTUX

«RIT»

Foja: 1

luego a la 18° Comisaría, y posteriormente, a la 1° Comisaría de Carabineros el 15 de mayo de 1982, permaneciendo allí hasta el 20 del mismo mes. En virtud de lo anterior, se aprecia que el actor ha sido además reconocido como prisionero político y torturado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I.

En efecto, según dan cuenta los antecedentes que constan en su carpeta de antecedentes, el actor fue detenido por civiles que resultaron ser funcionarios de Carabineros de la 18° Comisaría durante la noche del 14 de mayo de 1982, siendo llevado de inmediato a esta unidad policial. A las 02:30 de la madrugada del 15 de mayo, fue conducido hasta su domicilio, donde se efectúa el arresto de los demás moradores del departamento. Todos fueron trasladados a la 18° Comisaría y posteriormente a la 1° Comisaría, permaneciendo allí hasta el 20 del mismo mes, cuando fueron liberados sin cargo alguno. Con todo, se indica que mientras permanecían ilegalmente arrestados en la 18° Comisaría, fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el recurso de amparo interpuesto en su favor ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, denuncian haber sido interrogados ilegalmente en ese lugar, con la vista vendada y en medio de fuertes golpes de puño propinados por varios sujetos a la vez en la espalda, riñones, pecho y genitales.

Es posible constatar, finalmente, que el actor es actualmente beneficiario de una pensión ascendente al total de \$242.262.-, monto determinado en función de la pensión establecida por la Ley 19.992, el aporte único de la Ley 20.874 y aguinaldos. Dichos montos obedecen a reparaciones establecidas en su favor, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura individualizada en la "Nómina de personas reconocidas como víctimas" del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el n°5549.

NOVENO: Que, la primera defensa invocada por la parte demandada dice relación con la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante al amparo de los beneficios previstos en los textos normativos pertinentes, ya sea en transferencias directas de dinero, asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante un conjunto de reparaciones simbólicas que latamente menciona.

DÉCIMO: Que, el artículo 1 de la Ley 19.992 establece una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNXXTJYTUX

«RIT»

Foja: 1

que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo n°1.040 de 2003, del Ministerio del Interior.

A su vez, su artículo 2° prescribe que la pensión anual establecida en el artículo 1° ascenderá a \$1.353.798.- para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad, a \$1.480.284 para aquellos beneficiarios de 70 o más años de edad pero menores de 75 años y a \$1.549.422 para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; que se pagará en 12 cuotas mensuales de igual monto y se reajustará en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley 2.448 de 1979, o en las normas legales que reemplacen la referida disposición.

La pensión establecida en el inciso precedente será incompatible con aquellas otorgadas en las Leyes N°19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento.

Por su parte, el artículo 4 de la indicada ley señala que la pensión otorgada por esta ley será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario, incluidas las pensiones asistenciales del Decreto Ley 869 de 1975. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.

A su vez, la Ley 19.234 estableció beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos (abono de tiempo por gracia, pensión con transacción extrajudicial y pensión no contributiva, última de carácter vitalicio, que otorga el Presidente de la República, a aquellos exonerados políticos que cumplan con los requisitos para ello).

UNDÉCIMO: Que, el Estado de Chile ha hecho un formal reconocimiento de una serie de hechos constitutivos de violación de los derechos humanos acaecidos a contar del 11 de septiembre de 1973 a través del mensaje que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y a través de la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile”, conocida como Comisión Valech.

De las normas legales recientemente relacionadas es posible concluir que la pensión anual de reparación constituye más bien un beneficio de carácter social y no una indemnización del daño moral para reparar a aquellos que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNXXTJYTUX

«RIT»

Foja: 1

Estado o de personas a su servicio en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

En efecto, no aparece en la determinación de su monto que se hayan considerado los elementos propios y personales de quien ha debido soportar injustas y vejatorias privaciones de libertad, acompañadas de apremios físicos ilegítimos, lo cual constituye requisito fundamental a la hora de fijar una indemnización que no puede ser entendida sino con la finalidad de reparar o compensar un daño cierto y determinado, optando el actor por la pensión otorgada en la Ley 19.992 que como puede inferirse de la lectura del detalle de beneficios que actualmente recibe, remitido por el Instituto de Previsión Social en estos autos.

DUODÉCIMO: Que, conforme a lo razonado, no procede imputar a la indemnización reclamada las cantidades que en calidad de beneficiario de las reparaciones y pensiones que eventualmente haya recibido el actor ya en su respectiva calidad de preso político o como exonerado político, por lo que no cabe sino desestimar la excepción de reparación integral.

DÉCIMO TERCERO: Que, enseguida corresponde hacerse cargo de la excepción de prescripción alegada por el demandado Fisco de Chile.

En primer término, cabe señalar que tratándose de violaciones a los derechos humanos –cual es la calificación que debe darse a los hechos fijados en el motivo octavo del fallo –el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil se encuentra en normas y principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos y ello ha de ser necesariamente así por cuanto este fenómeno de graves transgresiones a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana es posterior al proceso de codificación, que por lo mismo no lo considera pues, por una parte, responde a criterios claramente ligados al interés privado y, por otra, por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX.

DÉCIMO CUARTO: Que, en virtud de lo antes expuesto, no cabe calificar la acción indemnizatoria deducida en autos como de índole o naturaleza meramente patrimonial, porque los hechos en que se la sustenta son ajenos a una relación contractual –vinculada a un negocio común– o extracontractual, sino configurativas de un delito de lesa humanidad del cual emana, además de la acción penal, una civil de carácter humanitario. Y es de esta clase, debido a que la pretensión del actor se fundamenta en las torturas de que fue víctima y en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNXXTJYTUX

«RIT»

Foja: 1

completa indefensión, por agentes del Estado que disponían de gran poder de coerción.

DÉCIMO QUINTO: Que, en efecto, no puede negarse el carácter de crimen de lesa humanidad a aquel que sirve de fuente u origen a la acción impetrada en la demanda.

Asimismo, se ha constatado que el actor aparece incorporado en la nómina de prisioneros políticos y torturados anexada al informe elaborado por la denominada Comisión Valech, y reconocido como víctima de prisión política y tortura. En tal carácter, y en lo tocante a la indemnización de perjuicios, hace aplicable también en lo que dice relación al acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares a fin de conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente, los convenios o tratados internacionales, las reglas de Derecho Internacional que se consideran *ius cogens* y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que “el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales” y que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su responsabilidad internacional (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas”, p.231).

DÉCIMO SEXTO: Que, la cuestión de los derechos fundamentales constituye un sistema construido a partir de criterios particulares, propios de la naturaleza del hecho, y por tal razón no es posible interpretar las normas que los regulan de manera aislada, pues toda conclusión alcanzada en tales circunstancias necesariamente será contraria a este sistema jurídico. Cuando las referidas normas dejan de aplicarse a un caso que estaban llamadas a regir se produce su contravención y se infringe también la regla del artículo 5º de la Constitución Política de la República que, junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos de Derecho Internacional, establece que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” y el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que también ha de entenderse el de obtener una indemnización como la que ha sido reclamada en estos autos.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, el derecho de las víctimas a recibir la reparación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNXXTJYTUX

«RIT»

Foja: 1

los Derechos Humanos en el derecho interno chileno, conforme lo dispuesto en el ya citado artículo 5 de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO OCTAVO: Que, analizando ahora los preceptos invocados por el Fisco de Chile en sustento de su pretensión de rechazo de la demanda indemnizatoria, cabe señalar que no resultan atinentes las reglas de derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, al encontrarse éstas en abierta contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las que protegen el derecho de recibir la reparación correspondiente a víctimas y familiares de éstas.

Asimismo, en tanto el Fisco acepta explícitamente la posibilidad de que el plazo de la prescripción extintiva que alega se compute desde una época distinta de aquella que señala el artículo 2332 del Código Civil, no puede sino concluirse que hay también una clara aceptación de que los preceptos de este cuerpo legal no son necesariamente los llamados a regir un caso como el planteado y que pueden, por lo mismo, dejar de tener aplicación sin que esta omisión importe contravenirlos.

No debe olvidarse que la obligación indemnizatoria está originada para el Estado, tratándose de la violación de los Derechos Humanos, no sólo por la Constitución Política de la República, sino también por los principios generales del Derecho Humanitario y de los tratados internacionales sobre la materia, como expresión concreta de los mismos, de tal suerte que las normas del derecho común interno se aplicarán sólo si no están en contradicción con esta preceptiva.

DÉCIMO NOVENO: Que, entonces, cuando el Código Civil en su artículo 2497 señala que las reglas de prescripción “se aplican igualmente a favor y en contra del Estado”, debe considerarse que ello no resulta pertinente a esta materia, atendida su particular naturaleza según se ha puesto de manifiesto y es por ello que debe darse aplicación a las normas contenidas en los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En efecto, de acuerdo con este último precepto la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar disposiciones de derecho interno. A este respecto debe también tenerse presente el carácter consuetudinario de estas normas y que atendida su naturaleza no son creadas sino simplemente reconocidas por los Estados, de lo que deriva su ineludible aplicación, de manera tal que produciéndose un hecho ilícito imputable a un



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNXXTJYTUX

«RIT»

Foja: 1

Estado la responsabilidad de éste surge de inmediato por la violación de la norma de Derecho Internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias indeseadas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado, además, que el artículo 63.1 de la Convención no remite al derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de modo que la obligación no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, sentencia de fondo de 29 de julio de 1988, pronunciado en caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”).

VIGÉSIMO: Que, en el mismo sentido, el artículo 131 de la Convención de Ginebra pretende hacer efectiva la responsabilidad que resulta de esta clase de hechos y no se limita a la de carácter penal. Lo mismo ocurre con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente desde el 27 de enero de 1980, que previene –según ya se afirmó– que los Estados no pueden invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales –en la especie, la de establecer responsabilidades–, incumplimiento del que ciertamente derivaría responsabilidad por un ilícito de índole internacional, como ya se ha señalado. Lo anterior conduce a sostener que el derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es, uno de aquellos que los Estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática, el que por su naturaleza es imprescriptible.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, además, debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva del inciso tercero del artículo 6 de la Constitución Política de la República y del artículo 3 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y que, de aceptarse la tesis del Fisco demandado, quedarían inaplicadas. Específicamente, en lo que se refiere a la norma de mayor jerarquía, puede señalarse que el referido artículo 6° se encuentra comprendido en el capítulo denominado “Bases de la Institucionalidad”, por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción y contiene el imperativo categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución Política de la República.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, no es posible sostener la inexistencia de responsabilidad del Estado en esta clase de infracciones por la prescripción de la acción civil reparatoria, porque el valor justicia que orienta el Derecho y la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNXXTJYTUX

Foja: 1

convivencia social rechaza tal posibilidad, al extremo que el Derecho Internacional ha recogido el criterio que predica que todo daño que sea su consecuencia ha de ser reparado. Además, tal alegación desconoce la naturaleza del hecho que motiva la indemnización solicitada cuando reclama el sistema de responsabilidad extracontractual, porque si bien es cierto que la cuestión está desvinculada de lo meramente convencional o contractual, ello no implica que haya de hacerse aplicación de este régimen, que comprende la cuestión de la culpa y el dolo referidos a un agente determinado. En un caso como el de la especie no resulta necesario ocuparse de acreditar estos supuestos de responsabilidad en los causantes directos del daño, porque inequívocamente los hechos no han podido acaecer sino porque el mismo Estado actuó de manera dolosa cuando desarrolló en forma reiterada conductas lesivas a los derechos fundamentales, esto es, cuando integrantes de sus órganos de seguridad se involucraron en torturas, desapariciones forzadas y muertes, entre otros graves atentados.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en síntesis, tratándose la tortura de un crimen de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez en orden a separar ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia que se le reclama.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en relación con el daño, presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, ha de señalarse que a pesar de su naturaleza particular el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona.



«RIT»

Foja: 1

Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en la especie, la existencia del daño moral en el caso de marras puede presumirse de los hechos ya asentados en el motivo octavo precedente, atendida la gravedad del hecho ilícito y las circunstancias en que este aconteció y sus consecuencias, con motivo de la detención, incomunicación, violencia física y psicológica experimentada por el actor con motivo de su detención ilegal, las torturas sufridas y su posterior exilio del país, experiencias traumáticas que sin duda produjeron diversos efectos psicológicos como necesario correlato de haber sido víctima de dichos actos y que justifican la indemnización por daño moral.

Lo anterior, por lo demás, es refrendado con el mérito del informe psicológico del demandante don Jorge Cerda Taverne, emitido en junio de 2024 por el psicólogo clínico del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don Francisco Muñoz Chesta, en el que se consigna que las experiencias traumáticas sufridas por el actor han tenido consecuencias psicológicas perjudiciales que persisten hasta la actualidad y evidencian una fractura del sujeto con su biografía de carácter irreversible, instalándose un cuadro psicopatológico que coincide con los criterios y descripciones del trastorno por estrés postraumático.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, en la determinación del quantum de la indemnización, no se considerarán los pagos ya recibidos por parte del Estado en virtud de las leyes de reparación, atendido lo razonado en los motivos vigésimo a vigésimo segundo precedentes. Por ende, este se evaluará prudencialmente, teniendo en consideración para ello el tiempo de detención; la innecesaria, irracional y violenta ocurrencia en los sucesos relatados y sus perniciosas consecuencias para el actor.

Por esta razón se fija la indemnización por concepto de daño moral en la suma de \$ 100.000.000 (cien millones de pesos).



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNXXTJYTUX

«RIT»

Foja: 1

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer el demandado, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago, y con intereses desde que el fallo quede ejecutoriado.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y no habiendo resultado el demandado totalmente vencido, se le eximirá, en definitiva, del pago de las costas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, 1700, 1702, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; 144, 160, 170, 177, 342, 383 y 384 del Código de Procedimiento Civil; en los artículos 5 y 6 de la Constitución Política de la República; en el artículo 3 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional, y en los artículos 1, 2 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y demás pertinentes, se resuelve:

- I. Que, se rechazan las excepciones deducidas por el demandado.
- II. Que, se acoge la demanda de 13 de mayo de 2024, a folio 1, condenándose al Fisco de Chile a pagar al actor la suma total de \$ 100.000.000 (cien millones de pesos)-, con los reajustes e intereses consignados en el fundamento vigésimo séptimo que precede.
- III. Que, no se condena en costas al Fisco de Chile, al no haber sido totalmente vencido.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

ROL C-8385-2024.

Pronunciada por doña Paulina Sánchez Campos, jueza suplente del Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, once de abril de dos mil veinticinco**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNXXTJYTUX

«RIT»

Foja: 1



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>
Código: VNXXTJYTUX